

2012

“Laguna olvidada”

Javier Garza Ramos

Animal Político

5 diciembre 2012

Consultada 8 diciembre 2019

<https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/laguna-olvidada/#axzz2EILj6lRL>

En la noche del 30 de noviembre, unas horas antes de que el presidente Enrique Peña Nieto asumiera el mando de las fuerzas federales de seguridad, dos policías municipales de Torreón fueron acribillados frente a una iglesia en una de las principales colonias residenciales de la ciudad.

Fueron los últimos homicidios del sexenio de Felipe Calderón en La Laguna, los números 3,535 y 3,536.

A las 11 de la mañana del sábado 1 de diciembre, justo en el momento en que Peña Nieto tomaba protesta y se colocaba la banda presidencial, los cuerpos de dos agentes del Ministerio Público de Durango fueron encontrados en la vecina ciudad de Gómez Palacio. Nuevo sexenio, pero eslabones de la misma cadena.

Pero los grupos criminales que han desatado la violencia en la zona metropolitana de La Laguna no habían terminado.

La madrugada del domingo 2 de diciembre, menos de 24 horas después de que Peña Nieto proclamara que “México merece vivir en paz”, los cuerpos de siete hombres fueron encontrados en diversos puntos de Torreón. Estaban descuartizados, algo que, de acuerdo con algunos analistas, se ha vuelto menos frecuente en el país. En el transcurso del día, otras dos personas fueron asesinadas.

Ese mismo domingo, mientras Peña Nieto y dirigentes partidistas firmaban el “Pacto por México” y lanzaran un combate a los “poderes fácticos”, los criminales laguneros “estrenaron” la gestión al frente de la Policía Federal de Manuel Mondragón y Kalb, quizá el nombramiento mejor ponderado del gabinete presidencial. En Gómez Palacio atacaron a un grupo de agentes y mataron a uno de ellos.

En las 48 horas que siguieron a la llegada de Peña Nieto a la Presidencia de la República, la zona metropolitana de La Laguna, la novena más grande del país con más de un millón de habitantes, ya sumaba 12 homicidios y un ataque a fuerzas federales.

Ninguna otra ciudad del país vivió un fin de semana tan violento. Pero los delincuentes seguían en lo suyo. El lunes hubo nueve homicidios y cuatro balaceras se desataron en un espacio de sólo tres horas en distintos puntos de Torreón.

En los primeros tres días de diciembre la suma de homicidios en La Laguna era de 21. Hasta ahora no ha sido detenido ningún responsable por estos crímenes.

Sólo los criminales que cometieron esta masacre saben si fue una provocación al nuevo gobierno o si simplemente siguen sus propios ritmos y necesidades en el exterminio de delincuentes rivales. Quizá la toma de posesión los tiene sin cuidado, pero han mandado un mensaje.

El nuevo gobierno debe tomarlo como una provocación. La percepción de un gobierno renovado y de una estrategia de seguridad diferente a la que ha dejado un tiradero de cadáveres queda opacada y desbancada por la sangrienta realidad. Los discursos inaugurales no se oyen cuando son abrumados por los balazos afuera de casa.

La violencia desatada no sólo en La Laguna sino en otras ciudades no ha sido tema que ocupe a los nuevos encargados del gabinete de seguridad. Ni una palabra han dicho al respecto, mucho menos han emprendido una estrategia de disuasión para frenar a los criminales que actúan como, donde y cuando quieren.

Hasta ahora, parecen más ocupados en las protestas alrededor de la toma de posesión de Peña Nieto, mientras la comentocracia capitalina está más interesada en el muerto ficticio de ese día que en las decenas de muertos reales en otras partes del país.

Cuánta razón tenía quien dijo que más allá del Toreo todo es Cuautitlán. La prensa de la capital, caja de resonancia de la agenda nacional, simplemente no está poniendo atención. Por eso luego se sorprenden cuando hay balaceras afuera de un estadio o una masacre de jóvenes en algún bar. Creen que son hechos inauditos cuando en realidad son resultado de una violencia cotidiana que se va incubando con cada cadáver arrojado en una esquina.

En octubre del año pasado, en respuesta a la balacera afuera del Territorio Santos Modelo durante un partido del Santos, noticia que dio la vuelta al mundo, el Gobierno Federal lanzó un operativo de seguridad involucrando al Ejército, la Policía Federal y las policías estatales y municipales.

El operativo “Laguna Segura” ha sido un fracaso para frenar el crimen. El promedio mensual de robos en la zona conurbada pasó de 749 en el año anterior al plan de seguridad a 976 en el año siguiente, de acuerdo con cifras publicadas en El Siglo de Torreón.

En cuanto a homicidios, en todo 2011 hubo 995. Al 4 de diciembre de este año la cifra llega a 984. Al paso que vamos, en tres días el número estará arriba de mil por primera vez en la región.

Así arrancó para La Laguna el sexenio de Enrique Peña Nieto. En los últimos años, masacres, balaceras, secuestros, homicidios de alto perfil no han bastado para motivar una reacción gubernamental que eleve el costo a los criminales por desatar estos niveles de violencia. Está por verse si motivará a los actuales encargados de la seguridad.

Quizá la geografía explique un poco las cosas. La Laguna se extiende sobre Coahuila y Durango. Coahuila es la tierra donde el Gobierno Federal no pudo presumir la eliminación de El Lazca, uno de los criminales más sanguinarios del país, porque se robaron el cadáver. Durango es el estado donde durante años se ha rumorado la residencia del Chapo Guzmán.

Con estos antecedentes es fácil concluir que nade ha estado poniendo atención.

2013

“Lecciones bajo metralla”

Javier Garza Ramos

El País

6 marzo 2013

Consultada 8 diciembre 2019

https://elpais.com/elpais/2013/03/05/opinion/1362502943_780681.html

Durante el último mes, el diario 'El Siglo de Torreón' en el norte de México ha sufrido el secuestro de cinco trabajadores y tres tiroteos a sus instalaciones. Así es el periodismo en los tiempos del narco

Las llamadas comenzaron a las nueve con treinta minutos de lo que iba a ser una muy larga noche del 7 de febrero.

Parece que secuestraron a dos compañeros, me avisaron de la redacción de El Siglo de Torreón, el principal periódico de la zona metropolitana de La Laguna, en el norte de México.

En unos minutos confirmamos que, en efecto, dos trabajadores del periódico habían sido raptados en una tienda cercana. Mientras recabábamos más información recibimos otro reporte de las autoridades. La identidad de una mujer plagiada un par de horas antes en otra parte de la ciudad correspondía a la de otra empleada del periódico.

Más llamadas, más preguntas, más peticiones de apoyo... y un nuevo reporte, y luego uno más. Otros dos compañeros del periódico habían sido también secuestrados.

Cinco secuestros, las mismas cinco interrogantes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Las típicas preguntas del diario oficio del reportero, pero ahora aplicadas no a la búsqueda de la noticia sino desentrañar los detalles de cinco vidas en riesgo y un escenario completamente inédito en el periodismo mexicano, que terminó por dejar al descubierto la desprotección de los medios y la incapacidad de las autoridades para hacer frente a los criminales.

Cinco trabajadores de un medio de comunicación ajenos a la tarea informativa (no eran reporteros, fotógrafos o editores) habían sido secuestrados como una novedosa forma de intimidación.

Era insólito el modus operandi de los criminales. Cinco secuestros en cuatro puntos distantes entre sí en un lapso calculado en seis horas, todo bajo las narices de soldados y policías que vigilan la ciudad de Torreón.

Pero el hecho no resultó tan extraño por el lugar donde ocurrió. La zona metropolitana de La Laguna, una conurbación de un millón de habitantes que incluye Torreón y otros tres municipios, es uno de los lugares más violentos de México, con presencia muy activa de los grupos criminales que disputan la llamada guerra del narcotráfico.

Los cinco compañeros fueron liberados unas horas después, claro el mensaje de intimidación contra la cobertura informativa de una ola de violencia sin precedentes en La Laguna desde la Revolución Mexicana hace 100 años.

El episodio dejó una lección aterradora: ya no sólo los periodistas, sino también cualquier trabajador de un medio de comunicación, son vulnerables a los embates del crimen organizado.

Todos los protocolos de seguridad que habíamos desarrollado para la redacción desde que El Siglo de Torreón comenzó a ser objeto de ataques, en 2009, no sirvieron porque se aplicaban sólo para reporteros. Tuvimos que recurrir a otras medidas que garantizaran la protección de todo el personal mientras manteníamos nuestra postura de seguir informando sobre los hechos violentos en la Comarca Lagunera.

Una de ellas fue aceptar la oferta de vigilancia que hizo la Policía Federal para apostar patrullas y agentes afuera de las instalaciones, como un intento por evitar el acoso o espionaje de quienes buscaran cometer otro secuestro.

Durante dos semanas la vigilancia minimizó el riesgo. Pero la Policía Federal también ha sido blanco de los criminales. Sus agentes han sido atacados más de treinta veces desde finales del año pasado. Esa racha llegó al periódico el 25 de febrero, cuando los policías asignados a la vigilancia de El Siglo fueron agredidos por un grupo armado desde un vehículo en movimiento.

La falta de respuesta a ese ataque invitó el segundo, al día siguiente, contra agentes apostados frente a la entrada principal del periódico, abierta en plena tarde para atender a clientes que buscaban colocar publicidad.

Dos personas resultaron heridas en la ráfaga de más de 30 tiros. De nuevo los policías no pudieron responder la agresión, de modo que al día siguiente otro grupo armado atacó de nueva cuenta a los policías. Esta vez provocaron la muerte de un trabajador de una empresa vecina que compraba comida en un puesto callejero.

Los ataques coincidieron con la víspera del aniversario 91 de El Siglo de Torreón, el 28 de febrero. Ese día publicamos un editorial de primera plana afirmando que la información que aportamos sobre lo que ocurre en La Laguna no se detendría. Pero el editorial parecía un “déja-vu”. Apenas tres semanas antes habíamos publicado otro a raíz del secuestro de nuestros cinco compañeros que rematábamos con el mismo compromiso de seguir informando. Algo anda muy mal cuando un diario tiene que publicar la misma cosa dos veces.

La racha de tres ataques dejó otra lección preocupante sobre los mecanismos de protección de periodistas que pretende aplicar el Estado mexicano: la seguridad que aportan sus fuerzas policiacas a los medios de comunicación puede resultar contraproducente al invitar más agresiones.

La realidad simple es aterradora: los medios de comunicación están completamente desprotegidos, al igual que el resto de la sociedad, por el imperio de la impunidad.

El secuestro de los cinco trabajadores y los ataques contra los policías dejaron claro que la temeridad de los grupos criminales no tiene límite ante la ausencia de castigo. Las agresiones que sufren los medios de comunicación en La Laguna desde hace cuatro años se multiplican por la falta de respuesta de las autoridades. Criminales atacan medios porque pueden y porque saben que no pasa nada.

La lección para los medios de comunicación es doble: Por un lado, de nada sirve enfocar los protocolos de seguridad a los reporteros y editores cuando cualquier trabajador está expuesto. Por el otro, dar vigilancia a un medio puede empeorar las cosas si no se llega al fondo del castigo para cada agresión.

Pero también hay lecciones para la comunidad entera, víctima diaria de la violencia. La Laguna queda expuesta como una región a merced de criminales que no se ven disuadidos para intentar ataques cada vez más espectaculares.

Homicidios, tiroteos, ataques a negocios, policías o autoridades se han vuelto fenómenos cotidianos desde hace un lustro, con la comunidad acostumbrada a ver conteos de muertos cada vez mayores. Más de mil tan solo en 2012.

Lo que no sabemos es si las autoridades han aprendido estas lecciones ante la escalada de la violencia criminal. Se pensó que el cambio en el Gobierno Federal, con una nueva estrategia, quizá mejoraría las cosas pero el actuar de los grupos criminales demuestra otra cosa.

Parte del problema radica en la naturaleza de esta zona conurbada. La Laguna es la única zona metropolitana del país, con excepción de la Ciudad de México, que abarca más de un estado y dista mucho de la profunda coordinación que tiene la capital.

Todos los días, miles de personas cruzan los límites de Coahuila y Durango sin reparar que han cambiado de estado. Viven en Torreón y trabajan en Gómez Palacio o viceversa. Todos los días, los periodistas que cubren asuntos locales transitan por la zona que respira como un solo cuerpo, con ritmos, hábitos, rutinas y estados de ánimo comunes que no distinguen las fronteras. El río Nazas, que divide ambos estados es más un factor de identidad histórica y cultural compartida que una línea divisoria.

Los mismos criminales no distinguen esa frontera. Cruzan el río cargados de armas o con cadáveres en la cajuela del automóvil. Pueden matar a una persona en Gómez Palacio y arrojar el cuerpo en Torreón. Pueden secuestrar a una persona en Torreón y llevarla a una casa de seguridad en Gómez Palacio.

Los únicos que ven un freno en la división geográfica son las autoridades. Cuatro municipios en dos estados significan cuatro policías municipales y dos policías estatales. Esta división pone a Torreón bajo un mando militar y a Gómez Palacio bajo otro.

Las capitales de Coahuila y Durango se encuentran a más de 200 kilómetros de distancia y los gobernadores tienen visiones muy distintas de cómo enfrentar el problema, derivados de sus estilos personales de gobernar.

Mientras tanto, en la Ciudad de México, a mil kilómetros de distancia, las autoridades sólo reciben los reportes de una nueva atrocidad en La Laguna con promesas de mayor coordinación que ya no son suficientes para disminuir la zozobra de miles de laguneros que cada día se preguntan cuándo acabará esta violencia.

Esas preguntas y esa violencia son el pan de cada edición diaria de El Siglo de Torreón. Una dieta informativa que ha traído temor, frustración, incertidumbre y largas noches de vigilia ante la amenaza permanente de estar en el fuego cruzado.

2014

“Violencia: de La Laguna a Michoacán”

Javier Garza Ramos

El País

15 enero 2014

Consultada 8 diciembre 2019

https://elpais.com/internacional/2014/01/16/actualidad/1389850116_368810.html

Hace un año, los reflectores que hoy ocupa Michoacán como un foco rojo de violencia estaban puestos sobre la Comarca Lagunera

Una balacera entre criminales y policías una madrugada días antes de que terminara 2012, trajo un mal augurio para 2013, que se reforzaría con ataques contra la alcaldesa de Gómez Palacio, contra el diario El Siglo de Torreón y contra la Policía Federal que enfrentaba agresiones varias veces por semana. En el arranque de ese año, y del sexenio de Enrique Peña Nieto, la zona metropolitana de La Laguna era la más violenta del país.

Un año después, los homicidios en La Laguna se desplomaron 50% y han transcurrido meses sin balaceras de alto impacto, un alivio para una población que ha visto desde masacres en bares hasta un tiroteo afuera del estadio de fútbol. Poco a poco se ha recuperado la tranquilidad de la población y la confianza para retomar las actividades cotidianas sin temor.

En el último año, la inseguridad en La Laguna ha tenido una trayectoria opuesta a la de Michoacán. Aunque son las mismas autoridades federales las que han encabezado los operativos en ambas regiones, los resultados son radicalmente distintos.

Cierto, las condiciones sociales en La Laguna, una zona que abarca partes de Coahuila y Durango, no son las de Michoacán. La zona metropolitana de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo es un concentrado urbano muy distinto a la dispersión de las poblaciones en Tierra Caliente. Y aunque la Comarca Lagunera fue consumida durante años por una guerra entre Los Zetas y el Cártel del Pacífico, nunca vio el fenómeno de las autodefensas.

Así como ahora funcionarios federales anuncian cada tres meses que ya van con todo en Michoacán, en el sexenio de Felipe Calderón La Laguna escuchó una letanía de anuncios sobre operativos de combate a grupos del crimen organizado, que habían disparado la cifra de homicidios en la zona metropolitana de 89 en 2007 a más de mil en 2012. También presenció un desfile de secretarios de Gobernación y mandos militares y de la Policía Federal pero las cosas, lejos de mejorar, empeoraban.

Para marzo del año pasado los focos rojos en La Laguna ardían con intensidad, pero luego vino el giro. No fue necesario hacer alarde de nada. A principios de ese mes viajaron a Torreón los secretarios de Gobernación, Defensa y Marina, el procurador general y el comisionado nacional de seguridad para reunirse con los gobernadores de Coahuila y Durango. No hubo pronunciamientos grandilocuentes ni discursos vanos. Los funcionarios hicieron una breve aparición pública en un restaurante para no perder la oportunidad de hacer relaciones públicas, pero fue la primera y última vez que la plana mayor del gabinete de seguridad pisó La Laguna.

Sin embargo, en ese momento las cifras de violencia tuvieron un parteaguas y comenzaron una caída. A partir de marzo de 2013, todos los meses de ese año registraron un número de homicidios menor al del mismo mes del año anterior. La Laguna cerró 2013 con 500 homicidios, 53% menos que 2012. En Torreón, la ciudad más grande de la zona, la caída fue más pronunciada, de 60%.

Es difícil apuntar a un solo factor como causa de la violencia. Hace unas semanas, al dejar la comandancia de la XI Región Militar desde donde encabezó los operativos de seguridad en La Laguna, el general Moisés García Ochoa me dijo que aunque suene trillado, la coordinación entre fuerzas federales y locales fue factor clave para inhibir la violencia de los grupos criminales.

Un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR, la Fiscalía) sobre los 69 presuntos capos detenidos o abatidos en lo que va del sexenio de Peña Nieto revela que La Laguna ha sido el lugar donde más jefes criminales han sido neutralizados. 17 de los 69 dirigían actividades delictivas en la zona y formaban la columna de mando del llamado “Cártel del Poniente”, una fractura del Cártel del Pacífico responsable de los actos de violencia más llamativos en la región durante 2012 y los inicios de 2013.

A los 17 se añaden otros dos presuntos jefes locales de Los Zetas detenidos en La Laguna, lo que significa que uno de cada cuatro capos detenidos o abatidos en el actual sexenio estaba vinculado a La Laguna.

El documento que la PGR reveló en diciembre señala que el Cártel del Poniente fue el segundo grupo más golpeado por las autoridades el año pasado, sólo después de Los Zetas y llama la atención que un grupo de origen y operación local, haya sufrido más bajas que otros cárteles con mayor presencia territorial, como el del Pacífico o el de Jalisco Nueva Generación.

También destaca el hecho de que las detenciones en La Laguna no las realizaron solamente fuerzas federales, sino también policías estatales de Coahuila y Durango y municipales de Torreón, lo que indica que la colaboración ausente durante años finalmente se materializó.

Estos datos hablan de una estrategia regional de seguridad armada de tal forma que comenzó a dar resultados en unos cuantos meses y redujo de manera sustancial los niveles de violencia al neutralizar a los jefes criminales. La Laguna no ha librado del todo la crisis, pues permanecen algunos reductos de estos grupos criminales dedicados ahora al secuestro, la extorsión o los asaltos, pero el operativo lanzado hace un año tuvo un avance sustancial al reducir la presencia de los grupos delictivos.

Los resultados han sido tan visibles que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha puesto a La Laguna como ejemplo cada vez que busca enumerar casos de éxito en la estrategia de seguridad del Gobierno Federal.

¿Qué hizo la administración de Peña Nieto en La Laguna que no ha hecho en Michoacán? ¿Por qué el mismo gobierno puede dar resultados positivos en un lado pero desastrosos en otro?

En La Laguna se demostró que se puede lanzar una estrategia para disuadir a los criminales de escalar la violencia y para establecer un principio de autoridad. El Gobierno Federal logró que las autoridades de Coahuila y Durango respondieran y que todos alinearan sus intereses. Y no fue necesario tanto discurso.

2018

“Una isla en el mar de violencia”

Javier Garza Ramos

El País

26 noviembre 2018

https://elpais.com/internacional/2018/11/27/mexico/1543288770_663929.html?id_externo_rsoc=TW_C

Cómo es que el mismo Gobierno mexicano que logró reducir la violencia en La Laguna la dejó crecer en prácticamente en el resto el territorio.

Hace exactamente seis años, la zona metropolitana de La Laguna era la más violenta del país. Le había arrebatado la distinción a Ciudad Juárez y Acapulco justo en un momento crucial: el cambio en el gobierno federal y la incertidumbre propia de cualquier transición.

En los días anteriores y siguientes a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República ninguna otra ciudad del país tuvo más homicidios dolosos que la zona conurbada de Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo, Durango.

La noche del 30 de noviembre, a unas horas antes de que Peña Nieto asumiera el mando de las fuerzas federales de seguridad, dos policías municipales de Torreón fueron acribillados frente a una iglesia en una colonia residencial. Fueron los últimos homicidios del sexenio de Felipe Calderón.

A las 11 de la mañana del día siguiente, sábado 1 de diciembre, justo cuando Peña Nieto se ceñía la banda presidencial, los cadáveres de dos agentes del Ministerio Público de Durango fueron hallados en Gómez Palacio.

El domingo 2 de diciembre, los cuerpos de siete hombres fueron arrojados en distintos puntos de la ciudad de Torreón. Estaban descuartizados. En el transcurso del día, otras dos personas fueron asesinadas en Torreón, mientras que en Gómez Palacio los criminales laguneros dieron la bienvenida al nuevo gobierno con un ataque a agentes de la Policía Federal, matando a uno de ellos.

Fue así como en las 72 horas alrededor del cambio de gobierno, 12 personas habían sido asesinadas en la zona metropolitana de La Laguna, una cada seis horas, crímenes que incluían ataques a cada nivel (federal, estatal y municipal) del aparato de seguridad y justicia.

No era violencia asociada a la transición, sino simplemente una dinámica criminal que llevaba años escalando, con grupos luchando por controlar los negocios de drogas en la región, indiferentes a los tiempos políticos. El espacio no es suficiente para enumerar lo que pasó en La Laguna en el resto de ese diciembre. Basta decir que el mes terminó con más de 100 homicidios y el año 2012 cerró con más de mil, la cifra más alta en cualquier registro.

Así arrancaba el sexenio de Enrique Peña Nieto en la región. Y todos se daban cuenta menos el nuevo gobierno. En enero, periodistas de El País visitaron La Laguna y el diario publicó un reportaje titulado “Código Rojo en el norte de México”. El entonces corresponsal en México, Luis Prados, escribió: “Torreón, cuyo eslogan fue una vez ‘la ciudad que venció al desierto’, está hoy de rodillas ante el narco”.)

Unos días después, el periodista Carlos Loret de Mola transmitió su noticiero matutino de Televisa desde la ciudad de Torreón y presentó una crónica de los horrores que la ciudad había vivido en las semanas previas y el ambiente de temor que se vivía. “La gente vive con pánico y se ha impuesto por necesidad un toque de queda al caer el sol, entre balaceras y ejecutados”, comentó entonces.

La violencia escaló en febrero con más homicidios y ataques armados. El gobierno federal y los estatales de Coahuila y Durango no podían contener la hemorragia que causaban criminales que se movían libremente entre ambos estados, sin respetar los límites entre estados y municipios que las autoridades no podían cruzar.

En el diario El Siglo de Torreón, donde trabajaba como director editorial, no nos dábamos abasto para procesar las noticias sobre hechos violentos que se venían en cascada y que inevitablemente nos alcanzaron.

El 7 de febrero de 2013, un grupo de delincuentes secuestró a cinco trabajadores de El Siglo de Torreón como una forma de intimidar al diario para que dejara de publicar noticias sobre la ola de violencia. Los cinco fueron liberados en unas horas con un mensaje amenazante. Entramos en contacto con altos mandos del Ejército y la Policía Federal para buscar la manera de protegernos.

Pero cuando la Policía Federal puso a agentes a resguardar el diario, se volvieron blanco. A finales de febrero fueron atacados tres veces en tres días consecutivos por hombres armados. La incapacidad de la Policía Federal para responder puso al gobierno en riesgo de reprobación su primera prueba de fuego en seguridad.

“La Laguna queda expuesta como una región a merced de criminales que no se ven disuadidos para intentar ataques cada vez más espectaculares”, escribí a principios de marzo en El País. “Lo que no sabemos es si las autoridades han aprendido estas lecciones ante la escalada de violencia”.

Afortunadamente, ese fue un punto de inflexión. Durante los dos meses siguientes, más de 50 integrantes del grupo criminal responsable de los ataques y los secuestros contra El Siglo fueron detenidos por el Ejército, que dismantló al grupo conocido como “Cártel del Poniente”, que disputaba el control criminal de la zona.

El Ejército lanzó un operativo que en 2013 redujo los homicidios casi a la mitad. Al final de ese año un reporte de la Procuraduría General de la República daba cuenta que una cuarta parte de los 69 jefes de cárteles del narcotráfico detenidos o abatidos por fuerzas federales de seguridad había caído en La Laguna. En ninguna otra región del país se había dado un golpe tan contundente. (De manera incidental, el operativo tuvo otra consecuencia positiva: Desde febrero de 2013 hasta ahora, ningún grupo criminal volvió a atacar un medio de comunicación en la Comarca Lagunera).

Para darle continuidad a la estrategia local de seguridad, en 2014 el gobierno federal creó la figura de un Mando Especial, un general del Ejército a cargo de coordinar a todas las fuerzas de seguridad (federales y locales) en la región. Los gobiernos estatales y municipales tuvieron incentivos para alinearse y no eludir su responsabilidad.

Cinco años después, amplias zonas del país han caído presa de la violencia. Algunas no la habían vivido en el sexenio anterior, como León, Querétaro o Colima; otras que se habían pacificado se encendieron

de nuevo, como Tijuana o Ciudad Juárez; otras nunca mejoraron, como Tamaulipas o Guerrero. Por eso ante este panorama, los resultados en la Comarca Lagunera parecen una anomalía. Los homicidios dolosos se redujeron de 1,085 en 2012 a 101 en los primeros 10 meses de 2018, de un promedio de tres diarios a uno cada tres días. La tasa de robo violento bajó de 452 por cada 100.00 habitantes en 2011 a 120 en 2017.

Viendo estos datos y repasando la experiencia de hace un sexenio, con frecuencia me pregunto cómo es que el mismo gobierno federal que logró reducir sustancialmente la violencia en esta zona del país la dejó crecer en prácticamente en el resto el territorio. La Laguna cierra el sexenio como una isla, si no de tranquilidad por lo menos de mayor seguridad, en medio de la violencia que devora otras ciudades y estados. La baja de la violencia tiene muchas causas, algunas atribuibles al gobierno, otras externas. Pero los resultados son palpables.

El periodista Raymundo Riva Palacio ha sugerido que el modelo de seguridad planteado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se basa en parte en el Mando Especial de La Laguna. La división del país en 266 regiones con un mando militar ciertamente así lo indica, al establecer cuadrantes para aplicar un modelo de mando militar sobre la seguridad pública.

Sin embargo, la gran diferencia es que el Mando Especial de La Laguna se planteó como una medida transitoria que fue acompañada de una depuración y mejora en las policías locales. La Comarca Lagunera cuenta ahora con policías mejor capacitados y aunque todavía son señalados por abusos y arbitrariedad, han logrado mejores resultados. Hace seis años prácticamente ningún homicidio se resolvía, ahora más de 40% de los ocurridos en el año están judicializados.

Esta dimensión policiaca no se encuentra en el plan de López Obrador, que se apoya totalmente en una estructura militar, ya sea de las fuerzas armadas regulares o de una pretendida Guardia Nacional. Resulta difícil creer que el gobierno federal saliente tenido algún éxito en materia de seguridad, pero el caso de La Laguna es una insólita excepción a la regla que merece ser estudiada.